



SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

Medellín, diez de noviembre de dos mil veintitrés

20-002

Proceso: **ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN**
Demandante: **JOSÉ ALEJANDRO BOTERO VELÁSQUEZ**
Demandado: **FIDUAGRARIA S.A. en calidad de administradora del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL SEGURO SOCIAL LIQUIDADO. - P.A.R.I.S.S.**
Radicado No.: **05001-31-05-005-2017-00666-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

En los términos del memorial allegado se reconoce personería a la abogada **LUISA FERNANDA SUAREZ LEON**, identificada con la Cédula de Ciudadanía número 1.098.787.939 y portadora de la Tarjeta Profesional número 353.844 del C.S. de la J. p, para que represente y ejerza el derecho de defensa del **PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES ISS EN LIQUIDACION**, conforme sustitución de poder otorgado por la apoderada **VANESSA FERNANDA GARRETA JARAMILLO**, mayor de edad, domiciliada en la Ciudad de Bogotá, identificada con la c.c. 1.085.897.821 y portadora de la Tarjeta Profesional N° 212.712 del Consejo Superior de la Judicatura, en su calidad de representante legal de **DISTIRA EMPRESARIAL S.A.S**, identificada con NIT 901661426-8, a quien a su vez le fue conferido poder por la apoderada especial de la **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO - FIDUAGRARIA S.A**, según consta en Escritura Pública N° 09 de 03 de enero de 2023, otorgada en la Notaria Treinta y Nueve (39) del Círculo de Bogotá, sociedad fiduciaria que obra única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EN LIQUIDACIÓN – P.A.R. I.S.S.**

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 38** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES

1.1. LO PRETENDIDO

Pretende el demandante que se condene a FIDUAGRARIA S.A. en calidad de administradora del PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL SEGURO SOCIAL LIQUIDADO. -P.A.R.I.S.S., a reconocer y pagar la prima de navidad de diciembre de 2012, cesantías definitivas en forma retroactivas reajuste de los intereses sobre las cesantías debidamente doblados correspondientes a 2013, 2014 y 2015. O en forma subsidiaria al reajuste de la indemnización por despido teniendo en cuenta todos los factores salariales, la sanción moratoria o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EN SÍNTESIS, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que estuvo vinculado laboralmente al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy liquidado, en calidad de trabajador oficial y miembro del sindicato, desde el 21 de marzo de 2001 hasta el 31 de marzo de 2015, fecha en la cual se le dio por terminado sin justa causa el contrato de trabajo.
- Que es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre SINTRASEGURIDAD SOCIAL y el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la cual en su artículo 3º señala que es aplicable a todo el personal de la entidad.
- Que le asiste derecho al régimen retroactivo de cesantías por disposición de la Convención Colectiva de Trabajo, no obstante, en la misma se pactó el congelamiento por 10 años de la liquidación retroactiva de las cesantías, es decir, desde el 2001 hasta diciembre de 2011, en los cuales se dio aplicación al régimen de liquidación anualizado establecido en la cláusula 62.
- Que la congelación pactada solo operó hasta diciembre de 2011, es decir, que a partir del 1º de enero de 2012 el sistema de liquidación de las cesantías volvió a ser por el sistema retroactivo conforme a la cláusula 62 de la Convención Colectiva, fue así como en la liquidación de las cesantías a diciembre de 2012, para el reconocimiento de los intereses sobre las cesantías se dio aplicación al sistema retroactivo de cesantías teniendo en cuenta todo el tiempo de servicios

al trabajador, esto es desde marzo de 2001 a diciembre de 2012. Sin embargo, para 2013, 2014 y 2015 fueron reducidos sin justificación alguna, descontando del tiempo de servicio el tiempo entre el 2001 y 2011, ello además de descontar los valores de cesantías pagadas como anticipo.

- Que las cesantías solo se cusan en la terminación del contrato, lo cual operó en 2015, de tal forma que cuando el derecho se causó ya no se encontraba congelada la retroactividad, siendo obligación de la entidad liquidar este derecho en forma retroactiva teniendo en cuenta toda la antigüedad en la entidad.
- Que el ISS nunca le reconoció la prima de navidad con fundamento en el artículo 51 del Decreto 1848 de 1989, el cual excluía de este derecho a los trabajadores oficiales que recibieran por Convención Colectiva una prima equivalente, estimando la entidad que la prima de servicios consagrada en el artículo 51 de la Convención Colectiva era equivalente a la prima de navidad, sin embargo, la exclusión del derecho a la prima de navidad fue derogada mediante artículo 17 del Decreto 0853 de 2012, además de los artículos 17 del Decreto 1029 de 2013 y artículo 17 del Decreto 1101 de 2015, en los cuales se consagra como derechos prestacionales de los servidores públicos la prima de navidad en forma compatible a la prima de servicios.
- Que mediante Resolución No. 7849 del 13 de febrero de 2015 el Instituto de Seguros Sociales le terminó unilateralmente el contrato de manera injustificada a partir del 31 de marzo de 2015, reconociéndole \$133.139.415 por prestaciones sociales e indemnización por despido sin justa causa, sin embargo la indemnización se encuentra liquidada en forma deficitaria, por cuanto no se dio una correcta interpretación al artículo 5º de la Convención Colectiva.
- Que en vista de la liquidación del ISS se suscribió contrato de fiducia mercantil con la sociedad FIDUAGRARIA SA para que administra el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL ISS. Además la Nación debe responder de manera solidaria por las obligaciones laborales del ISS.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL ISS- PARISS aceptó que en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el derecho pretendido oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos manifestó que es cierto que por acuerdo celebrado entre el ISS y el sindicato se dispuso el congelamiento de las cesantías por 10 años, por lo que no es cierto que las cesantías y los intereses a las cesantías del actor le hayan sido liquidados en forma deficitaria, ya que los mismos se liquidaron conforme a la norma convencional. De otro lado adujo que no es cierto que el actor se le haya desconocido el derecho a la prima de navidad, pues dado que este el carácter de trabajador oficial no tenía derecho a la misma conforme al artículo 51 del Decreto 1848 de 1969 por laboral en una Empresa Industrial y Comercial del Estado. Así mismo

indicó que no es cierto que se le haya cancelado en forma deficitaria la indemnización por despido injusto, pues la misma se liquidó conforme al artículo 5º de la Convención Colectiva. Indicó que no es cierto que al actor se le haya vulnerado algún derecho ya que la entidad hizo las gestiones para incluirlo en el retén social mientras la entidad existió, pero ante su liquidación, terminó dicho beneficio. Respecto a los demás hechos indicó que no le constan o se trata de apreciaciones de la parte actora que encierran una pretensión y por tanto serán objeto de debate probatorio.

1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín el 12 de diciembre de 2019 se **CONDENÓ** a **FIDUAGRARIA S.A.** en calidad de administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL SEGURO SOCIAL LIQUIDADO. - P.A.R.I.S.S., LA NACIÓN** a reconocer y pagar al señor **JOSÉ ALEJANDRO BOTERO VELÁSQUEZ**:

La suma de **\$110.505.947** por reajuste de la indemnización por despido injusto conforme a la Cláusula 5º de la Convención Colectiva.

Y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$5.525.297.

De otro lado **ABSOLVIÓ** de las demás pretensiones formuladas en su contra.

2. ARGUMENTOS

2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló que se encuentra acreditado que la demandante laboró al servicio del ISS entre el 21 de marzo de 2001 al 31 de marzo de 2015, como trabajador oficial y que era beneficiario de la Convención Colectiva, que Convención Colectiva 2001-2004, que fue prorrogada de 6 meses en 6 meses.

Estimó que no es procedente reconocer la prima de navidad pues conforme el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, dicha prestación no se aplica a los trabajadores oficiales que presten sus servicios en Empresas Industriales y Comerciales del Estado que por virtud de pactos y convenciones colectivas de trabajo, tengan derecho a primas de cuantía igual o superior, por tanto como el demandante era un trabajador oficial del ISS, no le asiste derecho a esta prestación por

expresa disposición legal, pues a él se le reconoció una prima de servicios convencional que tiene el mismo objeto de la prima de navidad que es la de remunerar los servicios prestados a la institución así se pague semestralmente. Y que si bien en los Decretos 0853 de 2012, 1029 de 2013 y 1101 de 2015 se dispuso el reconocimiento de una prima de navidad, estas normas van dirigidas a los empleados públicos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado

En cuanto al auxilio de cesantías adujo que conforme a la Ley 6 de 1945 tiene como fin proteger al trabajador durante el tiempo que estará cesante después de la terminación del contrato de trabajo, en los trabajadores oficiales, dicha prestación corresponde a un mes de salario por cada año de servicios o proporcionalmente y se liquidada a la fecha en que el trabajador cese la prestación del servicio, sistema de liquidación que fue conocido como Régimen de liquidación retroactiva, sin embargo esta forma de liquidación solo se extendió hasta la entrada en vigencia el Decreto 3118 de 1968 cuando se creó el Fondo Nacional del Ahorro, estableciendo que cada entidad pública liquidaría cada año las cesantías que se causaran en favor de sus empleados. Ahora, en el artículo 62 de la Convención Colectiva se dispuso que a partir del 1º de enero de 2002 se congela la retroactividad de las cesantías por 10 años, por lo que a partir de la fecha las cesantías se liquidarían anualmente. Los intereses a las cesantías deben ser reconocidos por empleador anualmente sobre la suma reconocida por concepto de cesantías en un 12% anual, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año siguiente. Estimó que en el caso de autos toda vez que el demandante se encuentra afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, los intereses a las cesantías deben ser reconocidos directamente por dicha entidad conforme lo dispone la Ley 432 de 1998, tal y como lo ha analizado en forma reiterada la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias 41522 de 2012, SL 662 de 2013.

De otro lado indicó que según lo indicado en el inciso 4 del artículo 62 de la Convención Colectiva los intereses a las cesantías se causan sobre las cesantías retroactivas liquidadas al 31 de diciembre de 2001, acrecentándolas con las cesantías anuales liquidadas durante el tiempo de la congelación, de donde se infiere que al vencimiento del término de la congelación de la retroactividad de las cesantías no significa que las mismas vuelvan a ser retroactivas desde el inicio de la relación laboral sino que comenzaron a ser nuevamente retroactivas desde la fecha en que culminó el término de congelación.

De otro lado en cuanto a la reliquidación de la indemnización por despido injusto, consideró que de conformidad con el artículo 5º de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004 cuando el contrato de trabajo es terminado sin justa causa por el empleador, el ISS debe reconocer al trabajador 50 días de salario por el primer año de servicios, pero además debe reconocerle 55 días adicionales de salarios adicionales por cada año de servicios subsiguientes, en caso de que el trabajador tuviere 10

o más años de servicios, es decir, que por los años siguientes al primero se reconocerían 105 días de salarios, en consideración a que la palabra adicional que se consagra en el literal d) de la cláusula convencional mencionada, se define como lo que se suma o añade a lo anterior y en consecuencia lo más beneficioso es entender que las partes convinieron que los 55 días de salarios por cada de trabajado subsiguiente al primero, deben adicionarse, sumarse o añadirse a los 50 días de salario que se reconocen por el primer año de servicio, así lo determinó la Corte en sentencia SL 3078 de 2019. Por lo que condenó a la demandada a pagar al demandante la suma de **\$110.505.947** por reajuste de la indemnización por despido injusto conforme a la Cláusula 5ª de la Convención Colectiva.

2.2. RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA

Manifestó que se debe reconocer la prima de navidad toda vez que el ISS nunca reconoció esta prestación al demandante, hecho que se fundamentó en el artículo 51 del Decreto 1848 de 1968; sin embargo contrario a lo considerado por el a quo, es procedente reconocer dicha prestación causada con posterioridad 17 de julio de 2012, pues es preciso tener en cuenta que las convenciones colectivas de trabajo son fuentes de derecho en materia laboral que permiten acordar beneficios extralegales adicionales a los legales, por lo que estas tienen plena validez en la medida en que no desconocen derechos irrenunciables. Agregó que la prima que se estableció en el artículo 50 de la Convención Colectiva de trabajo se reconoce en adición a la legal, es decir, lo que significa que es adicional a la que se otorga en el Decreto 1848 de 1968, por lo que una interpretación diferente sería desfavorable.

De otro lado indicó que si bien el Decreto 1848 de 1968 en su artículo 51 consagra una exclusión para aquellos trabajadores que tengan el derecho a primas anuales de cuantía igual o superior cualquiera sea su denominación, lo cual ha generado controversia, lo cierto es que lo consagrado en el artículo 50 de la Convención Colectiva que consagra una prima igual o superior a la prima de navidad, haría pensar que los trabajadores pierden en principio esta prima. Frente a esto la Corte Suprema de Justicia indicó que la prima que consagra el artículo 50 no es incompatible con la prima de navidad, en sentencias como 33376 de 2009, 23488 de 2005 y si bien la Corte Suprema de Justicia posteriormente cambió su postura a partir de la sentencia 35954 de 2012 para considerar que la prima del artículo 50 de la Convención si es una prima equivalente a la prima de navidad y que por tanto es incompatible, lo cierto, es que en el caso de autos, a través de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín en la cual se ordenó el reintegro, se reconoció la prima de navidad, lo que significa que existía cosa juzgada frente al derecho a la prima de navidad, por lo que no se puede aplicar el cambio de postura de la CSJ y dado que la sentencia no ordenó continuar

reconociendo la prestación, no constituye cosa juzgada sobre las primas causadas con posterioridad al reintegro.

Por otra parte, precisó que el demandante tiene derecho a la liquidación retroactiva de cesantías por disposición de la Convención Colectiva de Trabajo, y si bien en esta se pactó la congelación de la liquidación retroactiva de las cesantías desde el 2001-2011, lapso durante el cual se dio aplicación al régimen de liquidación anual, esta congelación operó hasta 31 de diciembre de 2011, por lo que a partir del 1º de enero de 2012 el sistema de liquidación de cesantías volvió a ser por el sistema retroactivo conforme al artículo 62 de la Convención, por lo que para la liquidación de los intereses a las cesantías a diciembre de 2012 se dio aplicación al sistema retroactivo teniendo en cuenta todo el tiempo de servicio del trabajador, esto es, desde el marzo de 2001 a diciembre de 2012. No obstante para el año 2013, 2014 y 2015 fueron reducidos sin justificación alguna desconociendo el tiempo de servicio entre 2001 y 2011 además de descontar los valores de cesantías pagadas como anticipo, desconociendo que las cesantías como derecho solo se causan a la terminación del contrato de trabajo, lo cual operó en 2015, de tal manera que cuando este derecho se causó ya no se encontraba congelada la retroactividad, siendo obligación del empleador liquidar las cesantías de forma retroactiva teniendo en cuenta la totalidad de antigüedad en la entidad. Insistió en que conforme al principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos mínimos que obedece a la naturaleza de orden público de las normas laborales, no debe darse validez a los acuerdos donde se desconozcan derechos laborales reconocidos en la Ley, de tal forma que no debe darse validez a la cláusula convencional del artículo 62 por desconocer el derecho legal de retroactividad de cesantías y los intereses sobre las mismas cesantías retroactivas, lo que constituye un menoscabo en los derechos mínimos legales y en consecuencia debe declarar que el demandante si beneficiario del reajuste de los intereses de forma retroactiva y ordenar que se reliquiden las mismas.

2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Únicamente presentó alegatos el demandante reiterando los argumentos esbozados en el recurso de alzada tendientes a que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia y se reconozca al actor la prima de navidad consagrada en el artículo 11 del Decreto 3135 de 1968, 51 del Decreto 1848 de 1969 y el 17 del Decreto 0853 de 2012, la cual es procedente y compatible con la prima reconocida Convencionalmente ya que ambas prestaciones no son equivalentes, tal y como lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia 1012 de 2015 y SL 593 del 17 de febrero de 2021.

Así mismo indicó que también es procedente el reconocimiento de las cesantías retroactivas e intereses sobre las cesantías, pues si bien es sabido que la Convención Colectiva estableció que entre el año 2001 y 2011 el derecho a las cesantías retroactivas se iba a congelar, es decir, que durante ese tiempo, los trabajadores del ISS no iban a tener derecho al pago anual de cesantías, lo que generaba que a diciembre 31 se liquidara el saldo de cesantías causado anualmente y se reconocieran unos intereses moratorios sobre las cesantías. Dicha congelación culminó el 31 de diciembre de 2011, por lo que a partir del 1º de enero de 2012 se retomó el régimen retroactivo de cesantías y por tanto para la liquidación de los intereses a las cesantías para el año 2012, el ISS tuvo en cuenta todo el tiempo de servicios y sobre ello liquidó los intereses; sin embargo para los años 2013, 2014 y 2015 no fue así y en cambio este concepto se redujo sin justificación alguna, descontando del tiempo de servicios el tiempo entre el año 2001 y 2011, además de ello descontó los valores de cesantías pagados como anticipos, lo que implicó que sus cesantías fueran liquidadas en forma deficitaria, tal y como lo analizó la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1901 del 28 de abril de 2021.

Finalmente solicitó fuera reconocida la sanción moratoria del artículo 1º del Decreto 797 de 1949 por el no pago o cancelación extemporánea o incompleta de los conceptos solicitados o en subsidio se reconozca la indexación.

3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA

Conforme los argumentos esbozados en el recurso de apelación, consiste en determinar si hay lugar al reconocimiento y pago de la prima de navidad y si hay lugar al reajuste de cesantías e intereses a las cesantías liquidándolas de forma retroactiva dejando de aplicar las cláusulas convencionales que establecieron el congelamiento de las mismas

Así mismo según lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencia 40.200 de 2015, la Sala analizará en grado jurisdiccional de CONSULTA los temas que no fueron objeto de impugnación por el PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL SEGURO SOCIAL EN LIQUIDACIÓN administrado por la sociedad Fiduagraria S.A. -P.A.R. I.S.S.- con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de la entidad por lo que también se analizará si es dable la reliquidación de la indemnización por despido injusto.

Es de aclarar, que si la parte actora solicita se conceda la sanción moratoria en los alegatos presentados, únicamente se examinarán aquellos que hayan sido mencionados en el recurso de alzada, siendo esta y no otra, la oportunidad propicia para ventilar su descontento con la decisión

adoptada en primera instancia, sin que los alegatos comporten una etapa que le permita introducir nuevos temas a estudiar.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, no es objeto de discusión que el señor JOSÉ ALEJANDRO BOTERO VELÁSQUEZ laboró en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, en calidad de trabajador oficial desde el 21 de marzo de 2001 hasta el 31 de marzo de 2015, según lo reconocen la entidad demandada.

Así mismo, se encuentra acreditado que en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES , existía una Convención Colectiva de Trabajo suscrita el 31 DE OCTUBRE DE 2001 (visible a folios 104/138), con la correspondiente nota de DEPOSITO oportuno, la cual estaba vigente para la fecha de finalización de la relación laboral, al no haberse allegado prueba de la voluntad de las partes de poner fin a tal acuerdo, conforme lo señalan los artículos 477 y 178 del CST y cuya aplicación se hace extensiva a todos los trabajadores, sindicalizados o no, por ser una organización sindical mayoritaria, por lo que es viable predicar que la actora tiene derecho a las prestaciones convencionales allí estipuladas, como se dispuso en la cláusula 3ª y se ha explicado por la jurisprudencia especializada, sentencias 34.405 del 17 de junio de 2009 y 43.160 del 19 de marzo de 2010.

En cuanto al reconocimiento de la **prima de navidad**, prestación consagrada para los trabajadores del sector público en el artículo 11 decreto 3135 de 1968 que preceptúa:

“...Todos los empleados públicos o trabajadores oficiales tendrán derecho a una prima de navidad o bonificación equivalente a un (1) mes de sueldo que corresponda al cargo en 30 de noviembre de cada año, y ella será pagada en la primera quincena del mes de diciembre.

Parágrafo 1. Cuando el empleado o trabajador no y haya servido el año completo tendrá derecho al reconocimiento de la prima de navidad a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicio y con base en el último sueldo devengado. ...”

Parágrafo 2. Quedan excluidos del derecho a la prima de navidad a que se refiere este artículo, los empleados públicos y trabajadores oficiales que presten sus servicios en establecimientos públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta, que por virtud de Pactos, Convenciones Colectivas de Trabajo, Fallos arbitrales o Reglamentos de Trabajo, tengan derecho a primas anuales similares, cualquiera sea su determinación”.

Dicha norma excluía - de la prima de navidad a quienes presten sus servicios entre otros, en empresas industriales y comerciales del Estado, que por virtud de convenciones colectivas de Trabajo, tengan derecho a primas anuales similares, cualquiera sea su denominación. Exclusión que también fue consagrada en el Art. 51 del Decreto 1848 de 1969, y en el . Art 32 decreto ley 1045 de 1978.

Por su parte, en los artículos 47 y 50 de la Convención Colectiva celebrada entre el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y el SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD SOCIAL, SINTRASEGURIDAD SOCIAL, que establecen la prima de servicio, -la cual debe anotarse es semestral y no anual- se indica que se tiene el derecho a ésta así: *“En adición a la prima legal, los trabajadores oficiales tendrán derecho a dos (2) primas de servicio...”*; y al tratarse la prima de navidad de una prima legal que expresamente no fue excluida por la Convención Colectiva de Trabajo, sino que por el contrario, en la norma citada, se recalcó que se tenía derecho a la prima de servicios, en *adición* a la legal.

Y si bien es cierto ha habido por parte de esta Jurisdicción tratamientos diversos al respecto, esto es, en una época se negó su reconocimiento al encontrarse que no se tenía el derecho, pero luego con Sentencia del 24 de junio de 2009 Radicado 32.547 MP. Dr. José Gnecco Mendoza, se consideró que la convencional se trataba de una prima adicional a la de navidad y por tanto se replanteo la anterior posición, cambiándola, en los términos señalados.

Sin embargo, esta posición fue recogida por la H. Corte Suprema de Justicia en Sentencia 35954 del 15 de mayo de 2012, M.P. LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS en donde concluyó que son incompatibles. En dicha sentencia se dijo:

“ De donde claramente resulta que para que se produzca la incompatibilidad entre la prima de navidad prevista por el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969 y otros derechos prestacionales laborales se exige: 1º) que el servidor público perciba otra clase de primas de naturaleza extralegal, esto es, originadas en convención, pactos, laudo arbitral o reglamento interno de trabajo, 2º) que esas prestaciones de referencia tengan carácter anual; 3º) que su cuantía sea igual o superior al de la prima de navidad, pues si fuere inferior su valor será equivalente al de la diferencia entre una y otra; y 4º) que no se hubiere mejorado dicha regla por la convención, el pacto, el laudo o el reglamento interno de trabajo, por cuanto en tal caso, por mejorarse el mínimo legal, prevalecerá la disposición extralegal.

*Para el presente asunto, al ser cierto que el valor de la prima de servicios contemplada por el artículo 50 de la convención colectiva de trabajo vigente para el periodo 2001-2004 --folio 699--, termina siendo equivalente al de la **prima legal de navidad establecida en el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969** en cita, por referir el monto de 30 días de salario, o un mes del mismo, en una y otra, respectivamente, y a ella accedió el juzgado en la suma de \$4'504.300,00 a partir del año 2001, por cuanto de los anteriores predicó su prescripción; y a dicho valor se suma el pago de la prima convencional de vacaciones por monto de \$3'596.226,00, a la cual también condenó el juzgado y el Tribunal igualmente confirmó, por periodos de 25 días de salario por cada año cumplidos 5 de servicios y menos de 10 según la regla 49 convencional, no aparecía entonces procedente la aplicación por parte del juzgador del precepto legal sobre prima de navidad.*

Tal improcedencia para este caso tampoco podía ser desconocida con el argumento propuesto por la replicante de que el artículo 50 convencional que se refiere a la prima de servicios indica que a ésta se tendrá derecho ‘en adición a la legal’, debiéndose entender referida a la prima de navidad prevista en el mentado artículo 51 del Decreto 1848 de 1969, por cuanto del cuerpo del ítem correspondiente en manera alguna se puede colegir tal conclusión, dado que, el aludido acápite es expreso sobre la prestación llamada ‘prima de servicios’, al punto que al referirse a su liquidación, en el Parágrafo 1º., explícitamente se señala que: “Parágrafo 1º. Para la liquidación de la prima de servicios tanto legal como extralegal aquí establecida, se tendrán en cuenta los siguientes factores (...)”. De modo que,

por sugestivo que parezca, la dicha adición no puede entenderse atada a 'toda' prima legal, sino simplemente a la 'prima de servicios', con independencia del tratamiento que la ley hubiere dado a dicho concepto laboral. "

Así las cosas, **no** es compatible la prima de navidad con la otorgada en la Convención Colectiva de Trabajo, pero sólo hasta el año 2012. Puesto que ese año se expidió el Decreto 853 de 2012, que no contiene la exclusión contemplada en normas anteriores, El cual establece en su art. 17:

"Artículo 17. Prima de navidad. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de navidad.

Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecido otra cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado en treinta de noviembre de cada año. La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

Cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año civil, tendrá derecho a la mencionada prima de navidad en proporción al tiempo laborado, que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere variable."

Conforme a lo anterior, es procedente la condena a la prima de navidad a partir de 14 de abril de 2013, toda vez que las causadas con anterioridad se encuentran prescritas, toda vez que la relación laboral terminó el 31 de marzo de 2015 y según se vislumbra a folios 86/87, la reclamación administrativa se adelantó el **16 de septiembre de 2016**, habiéndose presentado la demanda el 4 de agosto de 2017 (fl 22), por lo que si bien no ha prescrito la acción al no transcurrir tres años desde la terminación del vínculo, según lo establecido el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968 y 102 de su reglamentario 1848 de 1969, pero no puede predicarse lo mismo respecto de los derechos sociales reclamados, que tan solo pueden reconocerse los causados con posterioridad al **16 de septiembre de 2013**.

Ahora, según lo prescribe el artículo 51 del Decreto 1848 de 1969 la prima de navidad equivale a un (1) mes de sueldo que corresponda al cargo en 30 de noviembre de cada año y como dentro del plenario no obra prueba alguna de los salarios devengados por el señor BOTERO VELÁSQUEZ para tales fechas en los años 2013 y 2014, ni del salario que devengó en 2015, no puede efectuarse la liquidación de la prestación adeudada, lo cual corresponderá hacer a la demandada, quien cuenta con la información respectiva.

Por consiguiente se **REVOCA** la decisión de primera instancia en este punto y en su lugar se CONDENARÁ al PATRIMONIO AUTONOMO DE REMAPENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES del cual es vocera y administradora FIDUAGRARIA S.A (una vez agotados los recursos del PAR ISS liquidado, responderá por el contenido de las obligaciones derivadas de las acreencias

aquí impartidas La Nación, con cargo a los recursos del presupuesto general) a reconocer y pagar al señor JOSÉ ALEJANDRO BOTERO la prima de navidad a partir del año 2013, teniendo en cuenta los salarios reportados a noviembre de cada año y por la fracción de 2015 con base en el último sueldo devengado a esa data.

Ahora, pretende el demandante que se ordene el **reajuste de las cesantías e intereses a las cesantías liquidándolos de forma retroactiva**, inaplicando el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo que dispuso:

“A partir del primero de enero de 2002 se congela la retroactividad de las cesantías por diez (10) años.

El Instituto procederá a liquidar a 31 de diciembre de 2001, en forma retroactiva, las cesantías de la totalidad de los trabajadores, y liquidará sobre dicho monto intereses en cuantía del doce por ciento (12%) anual correspondientes al año 2001, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año 2002.

A 31 de diciembre del año 2002 y por los años subsiguientes, las cesantías se liquidarán anualmente y por las mismas se reconocerán intereses a la tasa del doce por ciento (12%) anual por el respectivo año objeto de liquidación, los cuales serán cancelados durante el mes de enero del año siguiente.

Sobre el monto de las cesantías liquidadas al 31 de diciembre de 2001, el Instituto reconocerá a partir del año 2002, intereses equivalentes al 15% anual (...).”

La convención colectiva de trabajo es un acuerdo de voluntades que celebran las organizaciones sindicales y los empleadores, con el fin de regular condiciones laborales, y en este caso el ISS y el sindicato SINTRASEGURIDADSOCIAL decidieron convenir por medio de la CONVENCIÓN COLECTIVA de trabajo que rigió entre **2001-2004**, en el **inciso 1º del art. 62**, el congelamiento por un término de 10 años (2002-2012) de la retroactividad del auxilio de cesantías.

Es por ello que se consideró por parte de la jurisprudencia, que al haberse pactado el congelamiento de la retroactividad como parte de la negociación colectiva, debía aplicarse a la totalidad de los beneficiarios de la convención colectiva de trabajo sin excepción alguna, más aún cuando dicho acuerdo se debió a una decisión de los trabajadores para que el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES no entrara en liquidación.

Sin embargo, la postura en comento fue reevaluada por la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia SL1901-2021, donde se consideró que el artículo 62 de la Convención Colectiva no era aplicable a aquellos trabajadores que venían gozando del régimen de cesantía retroactiva, es decir, a quienes se habían vinculado antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y/o a 25 de mayo de 2000 seguían disfrutando del régimen de cesantía retroactiva, precisando lo siguiente:

“(…) “...Es claro que los trabajadores que se encontraban gozando del régimen de cesantía retroactiva a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, artículo 13, podían de manera voluntaria cambiarse al nuevo régimen y, posteriormente, del Decreto 1252 de 2000, en su artículo 2 dispuso de manera expresa que los servidores públicos que se encontraban vinculados al 25 de mayo de 2000, conservaban el derecho a continuar con el sistema de cesantía retroactiva.

Ahora, desde otra perspectiva, se tiene que los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales se encontraban sujetos en principio, a las reglas fijadas en la convención colectiva, pues no existe duda sobre el derecho que le asiste a sindicatos y empleadores para lograr acuerdos que regulen las condiciones de trabajo, «Al ser producto de la autonomía de la voluntad de empleadores-trabajadores y explicarse desde una filosofía contractualista, su campo de aplicación es más estrecho, pues se reduce a determinar las condiciones de empleo de sus suscriptores o de quienes por extensión les sea aplicable». (CSJ SL1240-2019).

Sin embargo, lo cierto es que para las personas que venían gozando de la cesantía retroactiva se presenta la disyuntiva de aplicar el artículo 62 de la Convención que establecía un sistema de liquidación anual, el cual desconoce las normas legales vigentes sobre liquidación de cesantía, situación que impone, la aplicación de la norma legal, la cual, sin duda, es la norma que debe prevalecer pues se trata de una disposición de carácter irrenunciable y que regula el mínimo de derechos de los trabajadores oficiales en materia de cesantías.

Es así como no podía el sindicato pactar con el empleador la desmejora de las condiciones legales que, en este caso les permitía a sus beneficiarios mantener el carácter retroactivo de sus cesantías.

Vistas, así las cosas, la nueva tesis que esgrime la Sala es que el congelamiento de las cesantías dispuesto por la norma convencional y su liquidación anual es inaplicable ante la normativa que impone la conservación del sistema de liquidación retroactiva, contemplada en el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000, por la sencilla razón de que se trata de una prescripción legal que resulta irrenunciable y desconoce los derechos mínimos del trabajador. De esta forma, los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales que a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y/o a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantía retroactiva, no les resulta aplicable el artículo 62 de la Convención Colectiva de Trabajo. (...)” (Subraya y Negrilla de la Sala).

Posición que acoge la Sala, recogiendo cualquier posición anterior, en el sentido que las disposiciones en materia de congelamiento de cesantías dentro de la Convención Colectiva de Trabajo 2001-2004, resulten inaplicables para los trabajadores del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES que a la **entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y/o a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantía retroactiva,** en la medida que la Ley 344 de 1966 y el Decreto 1252 de 2000, **imponen la conservación del sistema de liquidación retroactiva, y al tratarse de un precepto legal, resulta irrenunciable,** máxime que se evidencia que el acuerdo convencional desconoce los derechos mínimos del trabajador. Tal posición ha sido reiterada en decisiones posteriores como las Sentencias SL2862 de 2021, SL593 de 2021, SL731 de 2022, SL2063 de 2022, SL186 de 2023.

Pese a lo anterior, no le asiste razón a la recurrente, en cuanto a que al señor JOSÉ ALEJANDRO BOTERO le asiste derecho a la liquidación retroactiva de las cesantías, toda vez que este se vinculó al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 1º de marzo de 2001, es decir, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y del Decreto 1252 de 2000, norma que dispuso que en su artículo 2º que a partir del 25 de mayo de 2000 los servidores públicos que se vincularan al

servicio del Estado la liquidación de cesantías se haría de forma anualizada, excepto para quienes a dicha data disfrutaban del régimen de cesantías retroactiva, por lo que este nunca tuvo derecho a la liquidación retroactiva de cesantías sino que la misma se hacía de forma anualizada. Así lo analizó la Corte en un caso similar en sentencia SL 314 de 2023 cuando indicó:

“En virtud de lo precedente, dicho canon convencional resulta inaplicable frente a aquellos trabajadores oficiales del ISS que, cuando entró en vigencia la Ley 344 de 1966 o al 25 de mayo de 2000, disfrutaban del sistema de liquidación retroactivo, dado que existe una serie de preceptos de orden legal, como la Ley 344 de 1996, la Ley 432 de 1998 y el Decreto 1252 de 2002, que permiten su conservación y, de acuerdo con lo dicho por esta Corporación en sentencia SL2862-2021, *«a todas luces les resulta mucho más favorable»*.

No obstante, en este caso la actora no gozaba del régimen retroactivo de cesantías por no haberse vinculado antes del 25 de mayo de 2000, por lo que procede la liquidación anual.”

Por consiguiente no es procedente el reajuste de las cesantías y consecuencialmente el de los intereses a las cesantías, pues la pretensión iba encaminada a que se reliquidaran aplicando los mismos a las cesantías liquidadas de forma retroactiva, por lo que al no ser procedente el reajuste de las cesantías, tampoco es procedente el reajuste de los aludidos intereses.

En consecuencia se CONFIRMARÁ la sentencia de primera instancia en este punto aunque por razones diferentes a la esgrimidas por el a quo.

De otro el a quo condenó al **reajuste de la Indemnización por terminación del contrato reconocida por el a quo**, indicando que no se dio una interpretación adecuada al artículo 5º de la Convención Colectiva, porque a su juicio la intelección correcta de la cláusula convencional es que se deben pagar 55 días por el primer año y 105 días por cada uno de los años subsiguientes, punto en que se revisa la sentencia en virtud de la consulta.

Para resolver dicha discusión es pertinente traer a colación lo dispuesto en la cláusula 5º de la Convención que en el literal d) aplicable a la actora por tener más de 10 años de servicios, reza:

“(…) Cuando el Instituto de por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral y sin justa causa, deberá reconocer y pagar al Trabajador Oficial afectado una indemnización por despido así:

(…)

d). Cincuenta y cinco (55) días adicionales de salario sobre los cincuenta (50) básicos del literal a) por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcional por fracción”,(…)”

La redacción de la norma en cuestión es clara al indicar que se reconoce 55 días de salario por el primer año y 55 días por cada año subsiguiente, sin que sea de recibo el argumento expuesto por el apoderado recurrente, tendiendo a que se deben reconocer por cada año subsiguiente al primero 105 días de salario, pues esta es una interpretación que se aleja de lo establecido en la Ley y en el

convención, y si bien no desconoce la sala el contenido de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, con radicado 36.014 de 2011, a través de la cual al liquidar una indemnización por despido injusto de una persona que devengaba salario superior a los 10 mínimos legales mensuales y que había laborado 7 años y 234 días a la empresa y que al tenor del artículo 64 del C.S.T se le concedió una indemnización de 252.43 días de salario, también lo es que esta providencia se constituye en una decisión aislada y por tanto no es precedente vinculante al caso,

Respecto a este tema se pronunció la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 1749-2021 radicado 83210, donde se dijo:

“Dicho de otra manera, de la lectura de tal disposición extralegal, no es dable inferir que a los 50 días del literal a) se le debe adicionar los 55 que habla el literal d), para con ello tener un total de 105 días por cada uno de los años subsiguientes al primero, tal interpretación no se acompasa ni con el contenido de la citada disposición extralegal ni tampoco con el criterio de esta Corporación, vertida entre otras, en las decisiones CSJ SL298-2018, CSJ SL- 2040-2019, CSJ SL738-2020 y CSJ SL2831-2020, en las cuales se precisó que la forma de liquidar tal indemnización es como lo hizo la demandada y lo refrendó el Tribunal, esto es, para el caso de los trabajadores que tuviesen más de 10 años, se les debe cancelar 50 días por el primer año y 55 por cada uno de los años subsiguientes y proporcionalmente por fracción.

Finalmente, es importante señalar que al ser la norma convencional objeto de estudio, clara en su enunciado, contenido y alcance en cuanto a los días que se deben tener en cuenta para liquidar la indemnización por despido sin justa causa para los trabajadores que tuviesen más de 10 años de servicios, que es el caso del demandante, no les permitido al juez la injerencia en su interpretación o entendimiento a partir del principio de favorabilidad o in dubio pro operario, pues para que este proceda, necesariamente debe existir duda o ambivalencia en la intelección de la disposición legal o en este caso de una estipulación convencional.(...)”

Posición reiterada en sentencia SL 4268 de 2022 donde se indicó:

Conforme al precepto transcrito, la indemnización por despido sin justa causa para trabajadores oficiales del ISS, beneficiarios de la convención colectiva de trabajo y que acrediten –como la señora Martha Elena Rendón Hoyos – más de diez años de antigüedad, corresponde a cincuenta días de salario por el primer año de trabajo, y de ahí en adelante, cincuenta y cinco «[...] por cada uno de los años de servicio subsiguientes», sin que sea posible de la norma derivar otra apreciación distinta. Así lo ha reconocido esta Corporación en sentencias como la CSJ SL3291-2021, SL1745-2021 y SL4345-2020.

Dentro del precedente anotado, es ilustrativa la liquidación de la sentencia CSJ SL3291-2021, que en un caso similar anotó:

i) Indemnización por despido sin justa causa de origen convencional

Como quedó establecido al resolver el recurso extraordinario el demandante es acreedor de la indemnización prevista en el mencionado artículo 5º, que al efecto establece:

Cuando el Instituto de por terminado un contrato de trabajo de manera unilateral sin justa causa, deberá reconocer y pagar al Trabajador afectado una indemnización por despido así:

a) Cincuenta (50) días de salario cuando el trabajador tuviere un tiempo de servicios no mayor de un año.

[...] d) Si el Trabajador tuviere diez (10) años o más de servicios continuo, se le pagarán cincuenta y cinco (55) días adicionales de salario sobre los cincuenta (50) básicos del literal a), por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

(...)

En la mencionada liquidación se reconocen cincuenta días de salario por el primer año de servicios, y en los casos de trabajadores con más de diez años de antigüedad, cincuenta y cinco por cada año subsiguiente, sin sumar a ellos cincuenta adicionales para un total de ciento cinco (105), como reclama la recurrente.

No es procedente en este caso la aplicación del principio *in dubio pro operario*, toda vez que no hay duda en la interpretación de la norma, a tal punto que ha sido reiterado el criterio de la Corte sobre el alcance de la cláusula convencional examinada.

En suma, no existe la apreciación deficiente de la liquidación definitiva, tal y como lo argumenta la impugnante, pues en efecto no tenía derecho a la indemnización en las proporciones por ella solicitadas, por lo tanto, el cargo no sale avante.”

Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que la interpretación que realizó el a quo, al tomar 55 días por el primer año y 105 días por cada año, no se encuentra ajustada a derecho y por tanto la misma será **REVOCADA**, mientras que la reconocida por la entidad según liquidación visible a folio 56 se encuentra acorde a lo establecido en la norma convencional.

Finalmente, respecto a la sanción moratoria que se solicita en los alegatos de conclusión dicho punto no será examinado al no haber sido expuesto como inconformidad en el recurso de alzada, pues era esta y no otra, la oportunidad propicia para ventilar su descontento con la decisión adoptada en primera instancia, sin que los alegatos comporten una etapa que le permita introducir nuevos temas a estudiar.

No obstante, se impondrá la indexación de la prima de navidad reconocida, pues se concede la misma dada la notoriedad de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, razón por la cual se ordena la actualización de las sumas adeudadas al momento de realizarse el pago.

En consecuencia la sentencia de primera instancia será **CONFIRMADA PARCIALMENTE** con las **MODIFICACIONES** a que se hizo referencia.

Sin costas en esta instancia.

4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín, el 12 de diciembre de 2019 dentro del proceso ordinario laboral promovido el señor **JOSÉ ALEJANDRO BOTERO VELÁSQUEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía Nro.

70.875.456, contra **FIDUAGRARIA S.A.** en calidad de administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL SEGURO SOCIAL LIQUIDADO. -P.A.R.I.S.S..**

SEGUNDO: REVOCA ABSOLUCIÓN y CONDENA al **PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES** del cual es vocera y administradora **FIDUAGRARIA S.A** (una vez agotados los recursos del PAR ISS liquidado, responderá por el contenido de las obligaciones derivadas de las acreencias aquí impartidas la Nación, con cargo a los recursos del presupuesto general) a reconocer y pagar al señor **JOSÉ ALEJANDRO BOTERO VELÁSQUEZ** la prima de navidad a partir del año 2013, teniendo en cuenta los salarios reportados a noviembre de cada año y por la fracción de 2015 con base en el último sueldo devengado a esa data.

TERCERO: CONDENA al PARIS a INDEXAR los valores objeto de condena la cual deberá liquidarse a la fecha de pago efectivo y partir de la causación de cada una de las primas de navidad, es decir, la al 1º de diciembre de cada anualidad y hasta la fecha de pago, utilizando la formula $\text{indexación} = \text{índice final} / \text{índice inicial} \times \text{capital} - \text{capital}$

CUARTO: REVOCA y ABSUELVE del reajuste de la indemnización por despido injusto.

QUINTO: En los demás aspectos la sentencia será CONFIRMADA

SEXTO: Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **JOSÉ ALEJANDRO BOTERO VELÁSQUEZ**
Demandado: **FIDUAGRARIA S.A.** en calidad de administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO DE REMANENTES DEL SEGURO SOCIAL LIQUIDADO. - P.A.R.I.S.S.**
Radicado No.: **05001-31-05-005-2017-00666-01**
Decisión: **MODIFICA SENTENCIA**
Fecha de la sentencia: **10/11/2023**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **14/11/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario